

# Revista Energética

Año 25, número 2, abril-mayo-junio 2001

**Loyola de Palacio, Vicepresidenta de la Comisión Europea:  
Hacia la Apertura del Mercado Energético  
en la Unión Europea**

**Luis María Caruso y Beatriz Arizu: La Regulación  
Eléctrica en América Latina y la Integración Regional**

**Informe OLADE: Comunidades Indígenas y  
Desarrollo Energético Sustentable en América  
Latina y el Caribe**

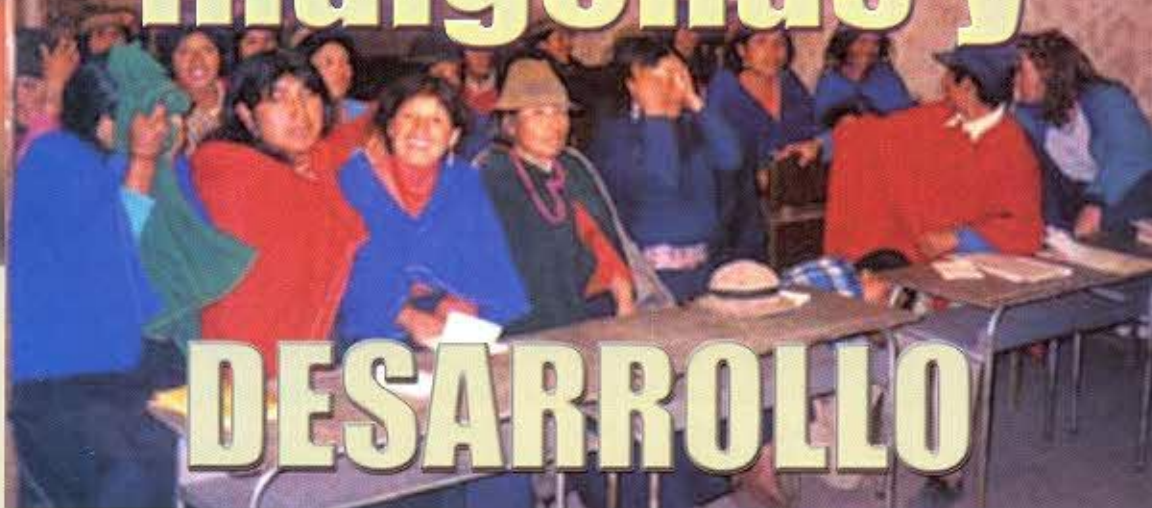
**Thomas Lyng Jensen: Evaluación Mundial  
de la Energía Renovable en Pequeñas Islas**

**Foros de OLADE  
Inician Actividades**

**Oportunidades de  
Negocios e Inversión  
en el Sector Energético**

Informe OLADE:

# Comunidades Indígenas y



## DESARROLLO

# ENERGETICO SUSTENTABLE EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE

## Introducción

Las relaciones entre indígenas y empresas de hidrocarburos en torno a la actividad de éstas, en regiones sensibles desde el punto de vista ambiental y social, han sido tradicionalmente difíciles. En los últimos años, las operadoras han tenido que entrar en procesos de consulta y participación con los indígenas, en muchos casos por iniciativa propia y proceder a compensaciones, sin que una normativa defina reglas de juego precisas. Por su parte, los pueblos ancestrales que habitan esas regiones están planteando reclamos cada vez más elaborados que incluyen, entre otros, el reconocimiento de sus derechos territoriales y la preservación de su cultura.

Para todos es importante una mayor intervención del Estado, a través del ejercicio de su función reguladora y supervisora del cumplimiento de normas y acuerdos.

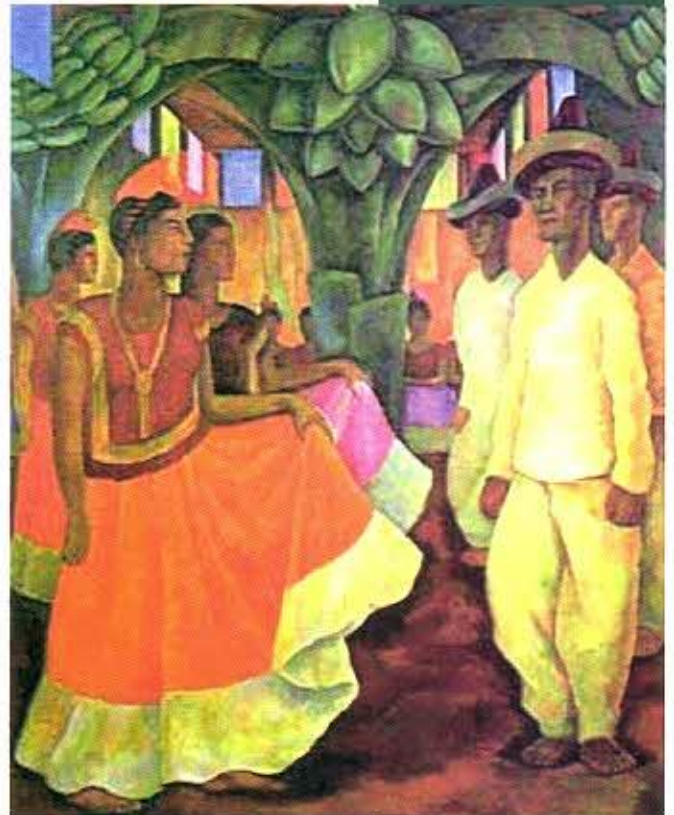
En este artículo, se resalta la importancia de reconocer y promover la participación indígena en el desarrollo energético de América Latina. Se tomará como referencia los criterios, avances y resultados parciales del programa Energía, Ambiente y Población que impulsan OLADE, el Banco Mundial, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural en Latinoamérica y el Caribe (ARPEL) y diversas instituciones de cooperación internacional, ante el reto de desarrollar una industria hidrocarbúrica compatible con los objetivos básicos de la sustentabilidad. Sin desconocer la relevancia de otros factores y actitudes necesarias, se hará énfasis en la regulación como instrumento para promover la participación y proveer un marco básico de entendimiento entre los actores.

*La regulación como herramienta del proceso: estado actual y aspectos a considerar.*

Sin desconocer los problemas de aplicación efectiva de las disposiciones legales, no se puede desdeñar el papel del Derecho como regulador de la convivencia social. Y si bien la vigencia de leyes y reglamentos por sí sola no garantiza el cumplimiento de los objetivos previstos (como el desarrollo sustentable, por ejemplo), sí confiere un marco obligatorio mínimo de derechos, obligaciones, funciones, acciones y normas de procedimiento y cumplimiento. A diferencia de las "buenas prácticas" o la "actitud proactiva", cuya conveniencia nadie cuestiona pero que dependen de la buena voluntad de los sujetos, las normas legales sí son exigibles. De ahí su atractivo.

En la materia que ocupa este artículo, es notoria en la región la profusión legislativa en torno a la participación ciudadana, sobre todo vinculada a la protección del ambiente. Algunos cuerpos constitucionales reconocen ya el derecho general de los ciudadanos a participar en el desarrollo nacional.

En el caso específico de la participación indígena, al menos once países de América Latina y el Caribe han ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que dispone que "...dichos pueblos (los indígenas y tribales) deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente".



Y que en el caso particular de tierras ocupadas por indígenas en cuyo subsuelo se encuentren recursos de propiedad reservada al Estado, como son por ejemplo los hidrocarburos, el Convenio manda a los gobiernos a "...establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras".

En el nivel nacional, Bolivia, además de haber ratificado el Convenio 169 OIT<sup>1</sup>, manifiesta en su Constitución que "se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos de los pueblos indígenas, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales..."<sup>2</sup>. La Ley 1333 de 1992 sobre ambiente dispone " la promoción del desarrollo sostenible con equidad y justicia social tomando en cuenta la diversidad cultural del país" y prevé la creación de mecanismos y procedimientos para la participación de los pueblos indígenas en los procesos de desarrollo sostenible y uso racional de recursos renovables. La Ley de Participación Popular reconoce a las Organizaciones Territoriales de Base (que incluyen comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales) como sujetos en los procesos de participación.

Ya en el ámbito de los hidrocarburos, la ley de hidrocarburos y su reglamento ambiental de hidrocarburos mandan evitar, en lo posible, las operaciones en territorios indígenas. Más aún, Bolivia ha considerado importante expedir un reglamento específico que regule las operaciones hidrocarburíferas en tierras indígenas (conocidas como territorios comunitarios de origen o TCOs).

La discusión de este reglamento, coordinada por las dependencias oficiales

encargadas del desarrollo de los asuntos indígenas y del sector hidrocarburífero, ha significado un interesante ejercicio de participación, a través de las consultas realizadas entre los principales interesados, el gremio petrolero y la confederación indígena boliviana.<sup>3</sup>

Colombia, por su parte, cuenta también con extensa regulación sobre participación ciudadana e indígena en particular. La misma Constitución Política ha dispuesto que "La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades." Este principio ha sido ampliado a favor de las comunidades negras tradicionales.

Los mecanismos de participación previstos en Colombia incluyen el proceso de consulta previa a los pueblos interesados en cualquier programa de prospección o explotación de recursos en sus tierras. En julio de 1988, Colombia expidió el Reglamento de Consulta Previa con las Comunidades Indígenas y Negras para la Explotación de Recursos Naturales dentro de su Territorio.

Ecuador, que se ha definido como un Estado pluricultural y multiétnico, reconoce a los pueblos indígenas y negros el derecho colectivo a ser "consultados sobre planes de prospección y explotación de recursos que se hallen en sus tierras, a participar en los beneficios de esos proyectos en lo posible y a ser indemnizados por los perjuicios socio-ambientales que les causen." El gobierno del Ecuador ha decidido reiniciar el proceso de reglamentación de la participación en el sector hidrocarburífero.

En Perú, el Ministerio de Energía y Minas ha elaborado una guía de relaciones comunitarias para las actividades del sector, en tanto que la nueva Constitu-

*"...el papel de organismos internacionales como OLADE consiste en aportar elementos para el debate y promover la cooperación. El programa de Legislación Ambiental y Energía OLADE/Universidad de Calgary/ACDI elaboró un documento sobre recomendaciones de política y regulación ambiental que incluye el tema de la participación indígena en la decisión del desarrollo energético y desde 1998 viene impulsando el Programa Energía, Ambiente y Población que trata específicamente el tema de las relaciones entre indígenas, industria y gobiernos, en torno a las actividades del sector hidrocarburos, en la cuenca subandina"*

ción de Venezuela de 1999 dedica un novedoso capítulo sobre Derechos de Pueblos Indígenas entre los que constan la información y consulta previas al aprovechamiento de los recursos naturales en hábitats indígenas.

En todo caso, a lo largo de la región hay un debate en marcha sobre la mejor forma de atender la temática, obviamente de acuerdo a las particularidades de cada país. Es de esperar, sin embargo, cierta coincidencia en principios básicos a nivel regional, no solo por una conveniente armonización en medio de un mundo globalizado sino considerando que, en ocasiones, los territorios de las comunidades indígenas traspasan las fronteras.

Ante esto, el papel de organismos internacionales como OLADE consiste en aportar elementos para el debate y promover la cooperación. El programa de Legislación Ambiental y Energía OLADE/Universidad de Calgary/ACDI elaboró un documento sobre recomendaciones de política y regulación ambiental que incluye el tema de la participación indígena en la decisión del desarrollo energético<sup>4</sup> y desde 1998 viene impulsando el Programa Energía, Ambiente y Población (EAP) que trata específicamente el tema de las relaciones entre indígenas, industria y gobiernos, en torno a las actividades del sector hidrocarburos, en la cuenca subandina.<sup>5</sup> Mediante un novedoso mecanismo de guía y toma de decisiones el EAP ha identificado cuatro áreas de acción (diálogo tripartito, información, capacitación y regulación) y las actividades a desarrollar.<sup>5</sup>

La orientación básica del programa, que guía las acciones emprendidas en las áreas de acción identificadas, es la provisión de herramientas a los actores participantes para que puedan intervenir más efectivamente en el tratamiento de la temática en sus países. Mientras que la información y la capacitación tienen como objetivo la transmisión de datos y experiencias y la



adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes que favorezcan el diálogo fructífero, el programa sobre regulación pretende desarrollar un conjunto de opciones viables de reglamentación (caja de herramientas) sobre diversos temas de interés, que sirvan de referencia en los procesos nacionales de desarrollo y reforma de legislación en la temática EAP.

OLADE ha identificado una serie de recomendaciones a este respecto:

- La necesidad de transformar los meros enunciados constitucionales
- y legales básicos en regulación que operativice estos principios.
- La necesidad de precisar los roles de los directamente involucrados: industria, comunidades indígenas y, especialmente, el Estado que está llamado a facilitar la conciliación de intereses y, en última instancia, a decidir sobre éstos.
- El reconocimiento de las diferencias culturales y las limitaciones financieras que puedan incidir en una participación significativa por parte de las comunidades.
- La necesidad de definir o establecer los mecanismos para definir los interlocutores válidos en las consultas
- Consideración especial de la oportunidad, vigencia y formas de la participación. Esto atañe no solo al momento en que debe arrancar el proceso de participación sino hasta qué etapa se extiende. Lo ideal es que se dé a lo largo del ciclo del proyecto, sin embargo, habrá que definir con claridad las formas que tome esa participación dependiendo del momento y situación de que

*“...corresponde al sector energético de la región aprovechar el interés que se está generando con respecto a la participación ciudadana en el desarrollo y el rol protagónico que están adquiriendo los indígenas, sobre todo en ciertos países, para sentar las bases –legales, institucionales, actitudinales– de una relación más fructífera entre los actores”*

se trate. Cabe aclarar que la consulta es solo una especie de participación.

- Definición de los efectos de la consulta. Si bien, al tendencia es que el Estado sea el encargado de la decisión final, es de esperar que a tal decisión se exija un mínimo de fundamento expreso que atienda los criterios expuestos por los consultados.
- Definición de pautas para distribución de los beneficios y compensaciones obtenidas, que privilegien los planes a largo plazo más que objetivos puntuales e inmediatos.
- Disposiciones claras sobre acceso a la información y la calidad de ésta.
- Ya fuera del ámbito estrictamente regulatorio, habrá que desplegar especiales esfuerzos para capacitar a los actores involucrados en los conocimientos, habilidades y destrezas requeridos para una interacción productiva. También habrá que definir ciertas consideraciones previas como son los regímenes de propiedad de las tierras indígenas y su alcance y la titulación debida.

En todo caso, corresponde al sector energético de la región aprovechar el interés que se está generando con respecto a la participación ciudadana en el desarrollo y el rol protagónico que están adquiriendo los indígenas, sobre todo en ciertos países, para sentar las bases –legales, institucionales, actitudinales– de una relación más fructífera entre los actores. Como ya se indicó, la existencia de una norma no es suficiente para que los objetivos se logren, sin embargo, siempre es preferible contar con un marco legal mínimo pero eficaz que brinde seguridad. Teniendo como referente obligatorio ese marco mínimo, los actores, tanto empresarios como indígenas y funcionarios de las instituciones públicas involucradas deberán desarrollar

nuevas y mejores formas de entendimiento sobre la base del respeto a los principios y derecho de cada uno de ellos. A esto apuesta el discurso sobre participación.

## Notas

- 1 Organización Internacional del Trabajo, *Pueblos indígenas y tribales: Guía para la aplicación del Convenio Número 169 de la OIT*.
- 2 Art 171
- 3 Conforme a información proporcionada por funcionario del Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios en el marco de la III Reunión Tripartita del programa Energía, Ambiente y Población, realizada del 23 al 25 de mayo de 2001, en Cartagena de Indias, Colombia, el reglamento está listo para sanción legal.
- 4 Proyecto de Legislación Ambiental y Energía, OLADE/UC/CIDA *Manual de Recomendaciones de Política y Legislación Ambiental*, en edición, Junio 2000.
- 5 Para efectos del programa, la cuenca subandina está integrada por Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname y Venezuela.
- 6 En el programa participan la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), ARPEL y Coordinadores Nacionales de los países participantes en representación de los respectivos gobiernos. Además de OLADE, el Banco Mundial, Carl Duisberg Gesellschaft, ACDI, CAF, Alianza del Clima y el Tratado de Cooperación Amazónica apoyan esta iniciativa.

# energy Magazine



Year 25, number 2, April-May-June 2001

**Loyola de Palacio, Vice-President of the European Commission: Energy Market Liberalization in the European Union**

**Luis María Caruso and Beatriz Arizu: Electric Power Regulation in Latin America and Regional Integration**

**OLADE Report: Indigenous Communities and Sustainable Energy Development in Latin America and the Caribbean**

**Thomas Lynge Jensen: World-wide Mapping of Renewable Energy on Small Islands**

**OLADE's Forums Start Up Activities**

**Business and Investment Opportunities in the Energy Sector**



# Indigenous Communities and



# **SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN**

## Introduction

The relationships between indigenous peoples and oil and gas companies regarding the latter's activities in environmentally and socially sensitive areas have traditionally been difficult. Over the last few years, operators have had to start up consultation and participation processes with the indigenous people, oftentimes at their own initiative, and to proceed with compensations, without the benefit of any standard-setting framework to define precise rules of the game. As for the ancestral indigenous nations inhabiting these regions, they are making increasingly elaborate claims that include, among others, recognition of their territorial rights and the preservation of their culture.

For all parties involved, it is important that there be greater intervention of the State, exercising its regulatory and supervisory obligations enforcing standards and agreements.

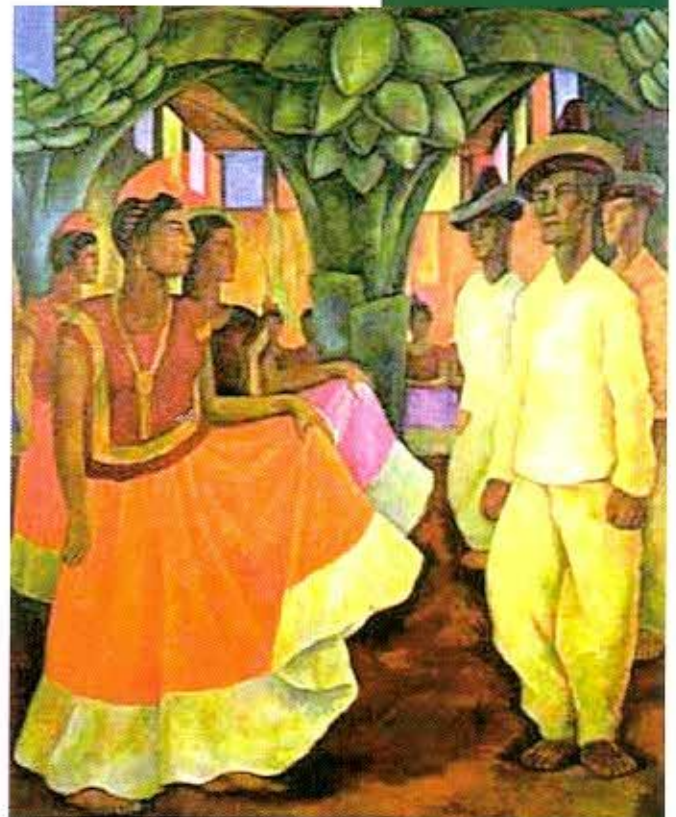
The present article highlights the importance of recognizing and promoting the participation of indigenous peoples in the development of energy in Latin America. The criteria, achievements, and partial results of the Energy, Environment and Population Program that is being conducted by OLADE, the World Bank, the Coordinator of the Indigenous Organization of the Amazon River Basin (COICA), the Regional Association of Oil and Natural Gas Companies in Latin America and the Caribbean (ARPEL), and various international cooperation institutions will be taken as a reference to address the challenge of developing an oil and gas industry that is compatible with the basic objectives of sustainability. Without ignoring the relevance of other necessary factors and attitudes, emphasis will be laid on regulation as an instrument to promote participation and to provide a basic framework of understanding among players.

### *Regulation as a tool of the process: current status and aspects to be considered*

Without ignoring the problems of effectively enforcing legal provisions, the role of Law as a regulator of social coexistence cannot be ignored. Although the validity of laws and regulations alone does not guarantee attainment of their agreed objectives (such as sustainable development, for example), it nevertheless does confer a minimum mandatory framework of rights, obligations, functions, actions and norms for procedure and compliance. In contrast to "sound practices" or a "proactive attitude," whose advisability is not being questioned by anyone but which depend on the good will of the subjects involved, legal norms can indeed be enforced. That is why they are so attractive.

In the topic that is being addressed by the present article, it is noteworthy that in the region there is an abundance of legislation regarding the participation of citizens, especially with respect to environmental protection. Some constitutions have already recognized the general right of citizens to participate in national development.

In the specific case of indigenous participation, at least 11 countries of Latin America and the Caribbean have ratified Convention 169 of the International Labor Organization which provides that these people (indigenous and tribal) should participate in the formulation, implementation, and evaluation of



the national and regional plans and programs that are capable of affecting them directly.

In the specific case of land settled by indigenous people, whose ground holds resources that are exclusively owned by the State, such as oil and gas, the Convention instructs the governments to "...establish or maintain procedures through which they shall consult these peoples, with a view to ascertaining whether and to what degree their interests would be prejudiced before undertaking or permitting any programmes for the exploration or exploitation of such resources pertaining to their lands."

At the national level, Bolivia, in addition to having ratified ILO Convention 169,<sup>1</sup> asserts in its Constitution that "the rights of the indigenous nations, especially those regarding their original community lands, guaranteeing the sustainable use and development of natural resources, are hereby recognized, respected, and protected in the framework of the law..."<sup>2</sup> Law 1333 of 1992 on the environment provides for the "promotion of sustainable development with equity and social justice, taking into account the country's cultural diversity" and envisages the creation of mechanisms and procedures for the involvement of indigenous people in sustainable development processes and the rational use of renewable sources of energy. The Law of People's Participation recognizes the grass-roots territorial organizations (which include campesino communities, indigenous nations and district boards) as the subjects of participation processes.

In the realm of oil and gas, the law for hydrocarbons and its environmental regulations for oil and gas instruct that, to the extent possible, operations in indigenous territories be avoided. Furthermore, Bolivia considers that it is important to issue specific regulations to govern oil and gas operations

in indigenous lands (known as original community territories, otherwise known as OCTs). The discussion of these regulations, coordinated by the official agencies in charge of development, Indian affairs, and the oil and gas sector, has involved an interesting exercise of participation, through consultations made among the principal stakeholders, the oil industry, and the Bolivian confederation of indigenous people.<sup>3</sup>

As for Colombia, it also has extensive regulations on citizen participation and the participation of the indigenous groups in particular. The Political Constitution itself has provided that "The development of natural resources in indigenous territories will take place without detriment to the cultural, social, and economic integrity of the indigenous communities. In the decisions that are adopted regarding this production, the Government will promote the participation of the representatives of the respective communities." This principle has been broadened to include traditional black communities.

The participatory mechanisms provided for in Colombia include the process of previously consulting the affected people in any program involving the prospecting or exploitation of resources on their lands. In July 1998, Colombia issued the Regulations on Prior Consultation with the Indigenous and Black Communities for the Exploitation of Natural Resources in their Territory.

Ecuador, which has defined itself as a multicultural and multiethnic State, recognizes that the indigenous and black people have the collective right to be "consulted on the plans for prospecting and exploiting resources located on their lands, to share the benefits stemming from these projects to the extent possible and to receive compensation for any social and environmental damages that they might cause." The Ecuadorian Government

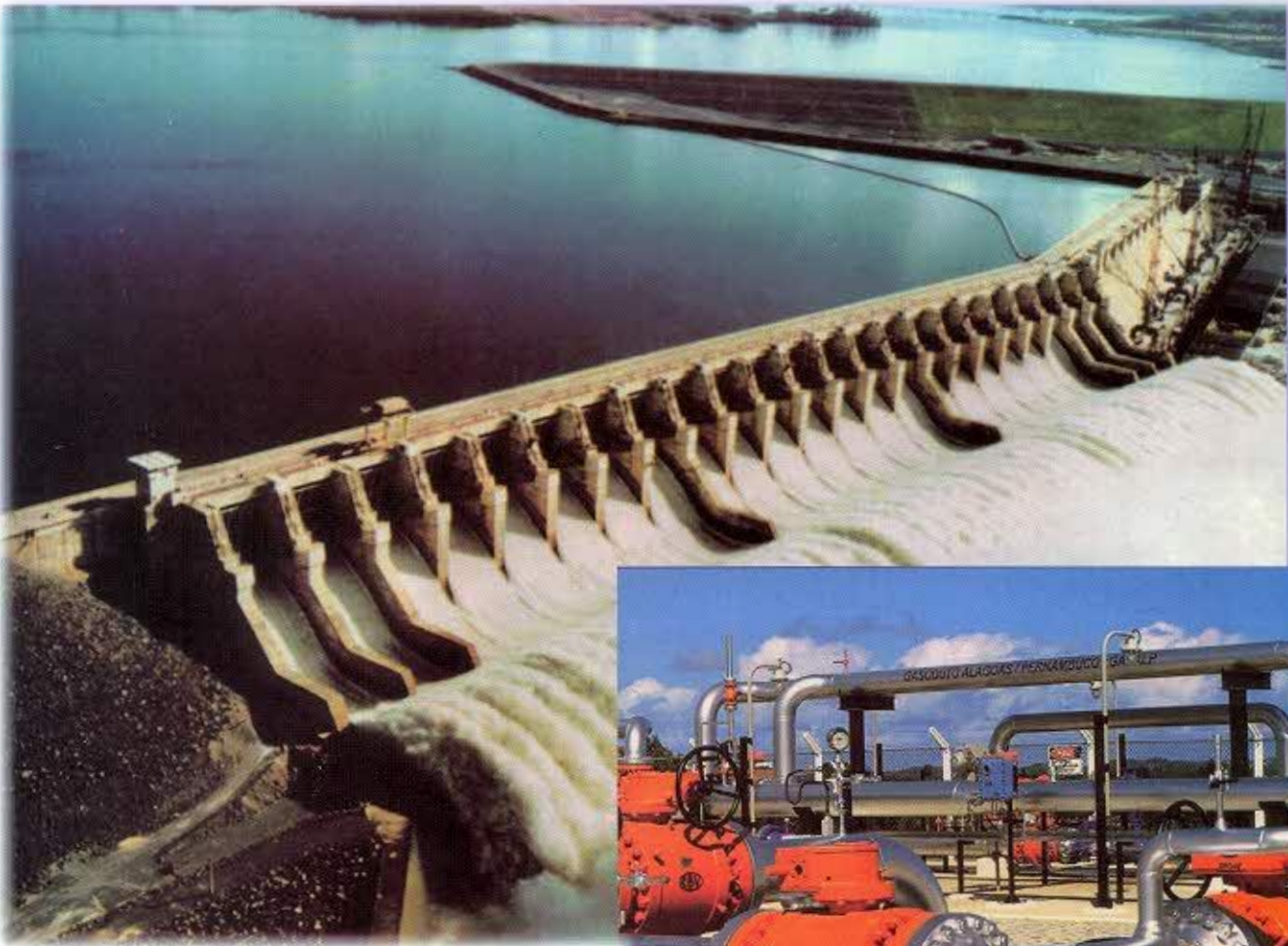
*"...the role of international organizations such as OLADE consists of contributing elements for debate and promoting cooperation. The OLADE-University of Calgary-CIDA Energy-Environmental Legislation Program prepared a paper on environmental policy and regulation recommendations that includes the issue of indigenous participation in energy development decision making and since 1998 has been promoting the Energy, Environment and Population Program (EAP), which deals specifically with the issue of relationships between the indigenous people, industry and governments with respect to the activities of the oil and gas sector in the sub-Andean basin"*

has decided to reinstate the process of regulating participation in the oil and gas sector.

In Peru, the Ministry of Energy and Mines has elaborated a guide for community relations for sector activities, whereas the new Constitution of Venezuela of 1999 has dedicated an innovative chapter on the Rights of the Indigenous Peoples among which can be found the right to information and prior consultation on the development of natural resources in indigenous habitats.

In any case, throughout the region, there is an ongoing debate on the best way to tackle these topics, obviously in keeping with the specific characteristics of each country. It is hoped, nevertheless, that a certain agreement will be reached regarding the basic principles throughout the region, not only to reach suitable harmonization in the midst of a globalized world but also keeping in mind that occasionally the territories of indigenous communities extend beyond national borders.

In view of this, the role of international organizations such as OLADE consists of contributing elements for debate and promoting cooperation. The OLADE-University of Calgary-CIDA Energy-Environmental Legislation Program prepared a paper on environmental policy and regulation recommendations that includes the issue of indigenous participation in energy development decision making<sup>4</sup> and since 1998 has been promoting the Energy, Environment and Population Program (EAP), which deals specifically with the issue of relationships between the indigenous people, industry and governments with respect to the activities of the oil and gas sector in the sub-Andean basin.<sup>5</sup> On the basis of an innovative guideline and decision-making mechanism, the EAP has identified four areas of action (tripartite dialogue, informa-



tion, training, and regulation) and activities to be carried out.<sup>6</sup>

The program's basic orientation, which guides the actions undertaken in the identified areas of action, is the provision of tools to the participating players so that they can intervene more effectively in dealing with the topics in their countries. Whereas information and training have as their objective the transmission of data and experiences and the acquisition of knowledge, skills, and attitudes that favor a fruitful dialogue, the program on regulation intends to develop a set of viable regu-

lation options (tool kit) on various subjects of interest, which serve as references in national legislative development and reform processes in the EAP areas.

Regarding this, OLADE has identified a series of recommendations:

- The need to transform the mere basic constitutional and legal statements into regulations that enforce these principles.
- The need to specify the roles of those directly involved: industry,

indigenous communities, and especially the State that is called upon to facilitate the effort to reconcile interests and ultimately to decide upon them.

- The recognition of the cultural differences and the financial constraints that might affect a significant participation by the communities.
- The need to define or establish the mechanisms to define valid players with a voice in the consultations.

*“...the region’s energy sector must take advantage of the interest that is being generated with respect to citizenship participation in development and the leading role that indigenous people are taking, especially in certain countries, to the lay the legal, institutional and attitudinal groundwork for a more profitable relationship between players”*

- Special consideration of the timeliness, validity, and forms of the participation. This has to do not only with the moment in which the participatory process must start up but also to what stage it must be extended. The ideal would be for this to continue throughout the project’s life cycle; nevertheless, how this participation evolves will have to be clearly defined depending on the specific moment and the situation. It should be clarified that consultation is only one kind of participation.
- Definition of the impacts of the consultation. Although the trend is for the State to be in charge of final decision making, it is expected that, in taking this decision, it will be required to take into account, at least to a certain extent, the viewpoints of those who were consulted.
- Definition of guidelines for sharing the benefits and compensations obtained, giving priority to long-term plans rather than specific, immediate objectives.
- Clear provisions on the access to information and the quality of this information.
- Outside the strictly regulatory domain, special efforts will have to be made to train the players involved in the knowledge, capabilities, and skills required for productive interaction. Certain previous considerations will have to be defined, such as ownership schemes for indigenous lands and their scope and due titling of land.

In any case, the region’s energy sector must take advantage of the interest that is being generated with respect to citizenship participation in development and the leading role that indigenous people are taking, especially in certain countries, to the lay the legal,

institutional and attitudinal groundwork for a more profitable relationship between players. As indicated earlier, the existence of a norm is not sufficient to achieve objectives; nevertheless, it is always preferable to have a minimum but effective legal framework that provides security. Bearing in mind this minimum framework as a mandatory reference, both entrepreneurs and indigenous communities and officials of the public institutions involved should develop new and better ways of understanding each other, based on respect for the principles and rights of each one. This is what is being gambled on when participation is promoted.

#### Notes

- 1 International Labor Organization, *Indigenous and Tribal People: Guide for the Application of ILO Convention No. 169*.
- 2 Article 171.
- 3 According to information provided by the official from the Vice-Ministry of Indigenous Affairs and Original People in the framework of the Third Tripartite Meeting of the Energy, Environment and Population Program held on May 23-25, 2001 in Cartagena de Indias, Colombia, the regulations are ready for legal ratification.
- 4 OLADE-University of Calgary-CIDA Energy-Environment Legislation Project, *Environmental Policy and Legislation for the Energy Sector in Latin America and the Caribbean: Tool kit*, June 2000.
- 5 For the purposes of the program, the sub-Andean basin is comprised of Argentina, Brazil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, and Venezuela.
- 6 The Coordinator of Indigenous Organizations of the Amazon Basin (COICA), the Regional Association of Oil and Natural Gas Companies in Latin America and the Caribbean (ARPEL) and the National Coordinators of the participating countries representing the respective governments are participating in the program. In addition to OLADE, this initiative is being supported by the World Bank, the Carl Duisberg Gesellschaft, the Canadian International Development Agency (CIDA), the Andean Development Corporation, the Climate Alliance, and the Amazon Cooperation Treaty.